

NACIONES UNIDAS

CONSEJO  
ECONOMICO  
Y SOCIAL



Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1201  
22 de enero de 1976

ESPAÑOL  
Original: FRANCES/INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
32º período de sesiones

INFORMACION PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1159 (XLI) DEL CONSEJO  
ECONOMICO Y SOCIAL RELATIVA A LA COOPERACION CON LAS ORGANIZACIONES  
INTERGUBERNAMENTALES REGIONALES QUE SE OCUPAN DE DERECHOS HUMANOS

Nota del Secretario General

En su 41º período de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1159 (XLI) <sup>1</sup>/ relativa a la cooperación con las organizaciones intergubernamentales regionales que se ocupan de derechos humanos. Con arreglo a lo dispuesto en esta resolución, el Consejo, deseando utilizar toda la información y experiencia disponibles con el fin de promover la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en beneficio de todos sin distinción de raza, sexo, color o religión, invitó al Secretario General, entre otras cosas, a organizar el intercambio de información en materias relativas a derechos humanos entre la Comisión y el Consejo de Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de la Unidad Africana, la Liga de los Estados Arabes y otras organizaciones intergubernamentales regionales que se ocupan especialmente de derechos humanos.

La presente nota contiene una comunicación de fecha 13 de enero de 1976 remitida por el Consejo de Europa en respuesta a la solicitud del Secretario General de que se enviara información dentro del marco del intercambio previsto en la resolución.

<sup>1</sup>/ Se aprobó esta resolución en la 1445ª sesión plenaria del Consejo, el 5 de agosto de 1966.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA EN LA  
ESFERA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 1975

INTRODUCCION

En respuesta a la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, hecha de conformidad con los términos de la resolución 1159 (XLI) del Consejo Económico y Social, del 5 de agosto de 1966, el Consejo de Europa preparó para la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comunicaciones sobre la labor realizada en 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974 en materia de derechos humanos. La comunicación sobre 1968 se distribuyó a la Comisión con la signatura E/CN.4/L.1042/Add.2, Iba a continuación del informe del Consejo de Europa a la Conferencia de Teherán (documento A/CONF.32/L.9), en el que se resumía la labor del Consejo en esta esfera hasta fines de 1967. La comunicación sobre 1969 se distribuyó con la signatura E/CN.4/L.1117/Add.1, la correspondiente a 1970 como E/CN.4/L.1057/Add.1, la relativa a 1971 como E/CN.4/L.1089/Add.1, la de 1972 como E/CN.4/1120, la de 1973 como E/CN.4/1139, y la correspondiente a 1974 con la signatura E/CN.4/1163.

De conformidad con una nueva solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa ha preparado esta otra comunicación acerca de sus actividades en materia de derechos humanos en 1975.

## I. APLICACION DE LA CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

1. Todos los Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos y los Protocolos Tercero y Quinto 1/. El Primer Protocolo de la Convención ha sido ratificado por todos los Estados miembros con excepción de Suiza, y el Segundo Protocolo por todos los Estados miembros con excepción de Francia.

2. El número de Estados Partes que han reconocido la competencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos para recibir demandas individuales (artículo 25 de la Convención) sigue siendo de 13 2/. Esos mismos 13 Estados, y también Francia, han reconocido la jurisdicción obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (artículo 46 de la Convención).

3. A fines de 1975, el Cuarto Protocolo de la Convención, que garantiza ciertos derechos y libertades distintos de los que ya figuraban en la propia Convención y en el Primer Protocolo 3/, estaba vigente en diez Estados: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, República Federal de Alemania y Suecia. Esos Gobiernos han aceptado también la jurisdicción obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a las demandas relativas a los derechos garantizados en virtud del Cuarto Protocolo. Nueve de ellos han aceptado también el derecho de petición individual.

4. Al 31 de diciembre de 1975, el Acuerdo Europeo relativo a las personas que participan en los procedimientos entablados ante la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que entró en vigor el 17 de abril de 1971, había sido ratificado por diez Estados (Bélgica, Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza).

---

1/ Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza y Turquía.

2/ Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido (incluidos 18 territorios de ultramar), República Federal de Alemania, Suecia y Suiza.

3/ Se refiere a las libertades relacionadas con la prisión por deudas, la circulación y elección de residencia, la expulsión del Estado del cual uno es ciudadano y la prohibición del derecho de entrada en él, y las expulsiones colectivas de extranjeros.

## II. ACTIVIDADES DE LA COMISION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

### A. Demandas interestatales

5. La demanda presentada por el Gobierno de Irlanda contra el Gobierno del Reino Unido y relativa a la situación en Irlanda del Norte fue declarada admisible en octubre de 1972 y ha ocupado extensamente la atención de la Comisión en los últimos 12 meses. Los miembros de la Comisión debieron oír a los testigos no menos de ocho veces para investigar los hechos de este asunto: fueron oídas 118 personas, cuyos testimonios abarcan más de 4.000 páginas de actuaciones. Las audiencias se celebraron en Estrasburgo, por ciertas razones de seguridad, en la base aérea de Sola, cerca de Stavanger, que había sido puesta a la disposición de la Comisión por el Gobierno noruego, y en Londres en un caso. Se celebraron en 1974 y a principios de 1975. Más tarde, en una audiencia que duró cinco días, celebrada en marzo de 1975, las partes presentaron sus argumentos y conclusiones sobre las pruebas obtenidas. Las delegaciones estuvieron encabezadas por el Procurador General de cada uno de los Estados interesados. La Comisión se dedica actualmente a redactar el informe, que se enviará al Comité de Ministros de conformidad con el artículo 31 de la Convención.

6. Tras una audiencia celebrada en Estrasburgo los días 22 y 23 de mayo de 1975, la Comisión declaró que eran admisibles las dos demandas presentadas por el Gobierno de Chipre contra el Gobierno de Turquía, sobre cuya acumulación había adoptado decisión previamente. Las demandas se referían a la situación planteada por la intervención turca en Chipre. El Gobierno demandante alegaba que las autoridades turcas violaban una serie de disposiciones de la Convención, inclusive las que garantizaban los derechos a la vida, a la libertad, a un proceso justo y al respeto de la vida privada y familiar, y las prohibiciones de torturas y tratos o penas inhumanos, de esclavitud y trabajos forzados, y de discriminación en cuanto al goce de esos derechos. El Gobierno acusado de haber cometido las violaciones cuestionó la idoneidad del Gobierno demandante para representar al Estado de Chipre; sostuvo que aún no habían sido agotadas todas las soluciones internas, y que la zona chipriota en que se afirmaba que se habían cometido los hechos denunciados no estaba bajo la jurisdicción del Gobierno de Turquía. Alegó que las demandas constituían un abuso del derecho de petición. La decisión de la Comisión respecto de la admisibilidad no influía en modo alguno en la validez de las demandas.

Posteriormente, una delegación de la Comisión se trasladó a Chipre, donde oyó a muchos testigos y visitó dos campamentos de refugiados. La relación de esta misión fue comunicada a las partes para que presentasen observaciones, las cuales fueron examinadas por la Comisión en diciembre de 1975.

### B. Demandas individuales

7. En 1975 se presentaron más de 450 nuevas demandas individuales. Durante ese período, la Comisión estudió la admisibilidad de 364 demandas, cuatro de las cuales fueron declaradas admisibles, a saber:

König contra la República Federal de Alemania. El demandante es un médico alemán al que las autoridades gubernamentales competentes revocaron el derecho a dirigir una clínica privada de su propiedad. Tras un proceso disciplinario se le rescindió también el derecho a ejercer la medicina. El demandante apeló contra esas decisiones ante los tribunales administrativos, y denunció la duración de las actuaciones, sobre la base del párrafo 1 del artículo 6 de la Convención.

X contra los Países Bajos. Esta demanda se refiere a la legitimidad de la detención de una persona considerada deficiente mental, y al alcance y detalles prácticos de los controles destinados a velar por que tal detención sea legal, según se dispone en el párrafo 4 del artículo 5 de la Convención (derecho de una persona privada de su libertad a presentarse ante un tribunal). El demandante alega entre otras cosas que no fue escuchado por el juez que en varias ocasiones autorizó que se prorrogase su detención, y que no fue informado de sus decisiones.

Marckx contra Bélgica. Esta demanda fue presentada por la señora Paula Marckx, periodista, en nombre propio y en el de su hija, nacida en 1973. La demandante cuestiona la condición de los hijos ilegítimos, tal como es definida por la legislación belga vigente, en particular respecto de la filiación, los derechos de herencia y el derecho a recibir donaciones. La demandante alega que tal condición, que equivale a una capitis diminutio, es contraria al artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y el artículo 3 (prohibición de tratos degradantes) de la Convención Europea de Derechos Humanos. Alega asimismo que da lugar a una discriminación, contraria al artículo 14 de la Convención, entre hijos legítimos e ilegítimos, así como entre madres solteras y casadas.

Times Newspaper Ltd. y otros contra el Reino Unido. En septiembre de 1972, el Sunday Times anunció que tenía la intención de publicar un largo artículo sobre la historia de los ensayos, la fabricación y ciertos efectos trágicos del medicamento denominado "taliódomida".

A petición de la empresa que fabricaba y vendía dicho medicamento en el Reino Unido, los tribunales fallaron que el artículo no debía ser publicado, en razón de que podría obstaculizar la marcha de las actuaciones judiciales, como las acciones incoadas por algunas de las víctimas, y las negociaciones entre esas víctimas y los fabricantes.

Los demandantes sostienen que el fallo constituye una violación de la libertad de expresión, que está garantizada por el artículo 10 de la Convención.

En diciembre de 1975, los representantes de las partes comparecieron ante la Comisión en una audiencia en la que se examinaron los méritos de la causa.

La Comisión aprobó su informe (artículo 31 de la Convención) sobre los cuatro asuntos siguientes, los dos primeros de los cuales han sido transmitidos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

Kjeldsen, Madsen y Pedersen contra Dinamarca. En estas demandas se cuestionan las disposiciones que entraron en vigor en 1971 y que hicieron obligatoria la educación sexual en las escuelas estatales de Dinamarca. Dicha materia no se enseña separadamente, sino junto con otras del plan de estudios. Los demandantes alegaron ante la Comisión que las disposiciones de que se trata no les permitían hacer educar a sus hijos de conformidad con sus propias convicciones religiosas y filosóficas (artículo 2 del Protocolo de la Convención).

Handyside contra el Reino Unido. El demandante, que es propietario de una casa editorial londinense, se proponía publicar un libro titulado "Little red schoolbook" traducido al inglés del original danés. Las autoridades confiscaron un gran número de ejemplares antes de que se publicara el libro, y el demandante fue multado por estar en posesión de una obra obscena con propósitos comerciales. Posteriormente apareció una edición revisada, que se vende actualmente en el Reino Unido. El demandante denunció ante la Comisión las medidas adoptadas respecto del "Little red schoolbook" e invocó en particular el artículo 10 de la Convención (derecho de toda persona al goce pacífico de sus bienes).

Levy contra la República Federal de Alemania. El demandante fue detenido, por sospecharse que había cometido un asesinato, en diciembre de 1970 en Frankfurt, y a partir de entonces permaneció detenido por haber sido denegada la libertad bajo fianza. En diciembre de 1973 fue condenado a 15 años de reclusión por homicidio. Su demanda ante la Comisión se refiere a la duración del período en que permaneció en prisión preventiva.

Miller contra Austria. Tras 37 años de afiliación al sistema de seguridad social de Austria, el demandante fue contratado por una empresa de Liechtenstein, pero continuó pagando sus cuotas en Austria con carácter voluntario.

Cuando llegó a la edad de jubilación se decidió que sus cuotas voluntarias no debían ser tenidas en cuenta para el cálculo de su pensión ordinaria, debido a una convención concertada entre Austria y Liechtenstein en 1969. El demandante afirma que está sin fondos y que es víctima de una discriminación.

8. La Comisión ha presentado un breve informe respecto del asunto Vampel contra Austria al Comité de Ministros, para su información, tras haber retirado el demandante su demanda a raíz del indulto concedido por el Presidente de la República de Austria en abril de 1975. El demandante, que fue condenado por homicidio en 1970, había denunciado el largo tiempo que permaneció en prisión preventiva.

9. Entre las otras demandas que examinó la Comisión, ya sea respecto de su admisibilidad o de sus méritos, cabe mencionar las siguientes:

- Varias demandas individuales presentadas contra el Reino Unido en relación con la situación en Irlanda del Norte, entre las que figura la del Sr. Donnelly y otras personas, que dieron lugar a audiciones de testigos en Belfast y Kent en junio de 1975, y a que se celebrase una audiencia en Estrasburgo en diciembre de 1975.

- Varias demandas presentadas contra Islandia, relativas a la posesión de perros en ese país, que en principio está prohibida en las ciudades de acuerdo con las reglamentaciones sanitarias.
- Una demanda presentada contra el Reino Unido en relación con los castigos corporales en vigor en la Isla de Man.
- La demanda presentada contra Dinamarca por el Sr. Becker, que teme que se devuelvan a Viet-Nam 204 niños que fueron autorizados a permanecer en Dinamarca, de conformidad con el artículo 24 del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra.
- La demanda presentada contra el Reino Unido (declarada inadmisibile en mayo de 1975) por Ilse Hess, esposa del ex dirigente nazi Rudolf Hess, recluido en la prisión de Spandau desde 1947. Entre las alegaciones de la demandante figura la afirmación de que el prolongado encarcelamiento de su esposo constituye un trato contrario al artículo 3 de la Convención.
- La demanda presentada por dos mujeres contra la República Federal de Alemania respecto del problema del aborto. Las demandantes protestan contra el fallo del tribunal constitucional federal en que se declara que es inconstitucional la ley que no permite entablar una causa criminal cuando el fin del embarazo se practica con arreglo a ciertas condiciones.

10. Por último, en su período de sesiones de julio de 1975, la Comisión reeligió Presidente al Sr. J. E. S. Fawcett (británico), y Vicepresidente al Sr. G. Sperduti (italiano). Como segundo Vicepresidente eligió al Sr. C. A. Nørgaard (danés).

### III. ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

11. En 1975 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido dos fallos.

12. En el asunto Golder, relativo al Reino Unido, el Tribunal decidió, en su sentencia del 21 de febrero de 1975, que la Convención Europea de Derechos Humanos había sido violada en dos puntos.

Este asunto se inició con una demanda presentada ante la Comisión por el Sr. Golder, en la que éste alegaba que la negativa del Secretario del Interior a permitirle, mientras estaba cumpliendo una pena de prisión, que consultara a un abogado, con miras a demandar a un agente de policía por calumnia, le había privado del derecho a recurrir a los tribunales, lo que era una violación del párrafo 1 del artículo 6 de la Convención Europea. También decía que se había violado el artículo 8 porque la negativa del Secretario del Interior le había impedido mantener correspondencia con un abogado.

Al analizar los hechos, el Tribunal señala en su fallo que, si bien no se había negado oficialmente al Sr. Golder el recurso a los tribunales, se le había impedido efectivamente que incoara en 1970 la demanda como tenía pensado.

Señalando que el derecho a recurrir a los tribunales no está formulado en términos concretos, el Tribunal dictamina que, sin embargo, el párrafo 1 del artículo 6 comprende ese derecho, ya que, según los términos del fallo, el "derecho a recurrir a un tribunal es el derecho a entablar un proceso en cuestiones civiles". El Tribunal llegó a esta conclusión después de una larga exposición de los motivos basados en el texto y en el contexto del párrafo 1 del artículo 6, del propósito y el objetivo de la Convención y de algunos principios generales de derecho.

Sin entrar en la cuestión general de determinar cuáles son los reglamentos o limitaciones que pueden permitirse en las cuestiones de recurso a los tribunales, el Tribunal observa que el Sr. Golder trataba de justificarse ante una acusación que se había hecho contra él, que el incidente ocurrió mientras estaba encarcelado y tenía relación con la vida de la prisión, y que el proceso judicial proyectado se hubiera dirigido contra un miembro del personal de la cárcel que estaba bajo la autoridad del Secretario del Interior. El Tribunal considera que en esas circunstancias era justo que el Sr. Golder pudiera haber deseado consultar a un abogado con miras a entablar un proceso y que no era el Secretario del Interior quien tenía que evaluar por sí mismo las perspectivas de dicho proceso.

En relación con la denuncia relativa al artículo 8, el Tribunal afirma que, si bien no se detuvo ni censuró ningún mensaje -por ejemplo, una carta que el Sr. Golder hubiera escrito a un abogado-, "el impedir a alguien incluso que inicie una correspondencia", que fue lo que ocurrió en el presente caso, "constituye una de las formas más extremas de "interferencia" ... en el ejercicio del "derecho al respeto de la correspondencia"".



El Tribunal declara que el derecho al respeto de la correspondencia no está sujeto "a limitaciones implícitas" y que no alcanza a ver en qué forma se podría justificar la decisión del Secretario del Interior en virtud de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 8.

En conclusión, el Tribunal sostiene que la denegación de la petición del Sr. Golder viola el párrafo 1 del artículo 6 (por nueve votos contra tres) y el artículo 8 (por unanimidad). Considerando que la cuestión de dar una satisfacción justa estaba "lista para una decisión", el Tribunal ha decidido (por unanimidad) que sus "anteriores conclusiones representan por sí mismas una satisfacción justa y adecuada en virtud del artículo 50".

13. En el fallo emitido el 27 de octubre de 1975, el Tribunal ha sostenido que, en el asunto del Sindicato Nacional de la Policía Belga, relativo a Bélgica, no ha habido ninguna violación de la Convención Europea.

Dicho asunto está relacionado principalmente con la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar sindicatos para la defensa de sus intereses y de afiliarse a ellos (artículo 11 de la Convención Europea). El asunto se inició con una demanda presentada por el Sindicato ante la Comisión el 5 de marzo de 1970. El Sindicato, que se había fundado para proteger los intereses profesionales de todos los miembros de la policía municipal, alegaba que Bélgica había violado la Convención al negarse a aceptarlo como uno de los sindicatos más representativos y al excluirlo por consiguiente de las consultas con los sindicatos previstas en la legislación Belga.

En su informe, la Comisión expresó la opinión de que no había habido violación de la Convención. No obstante, la Comisión remitió el caso al Tribunal, subrayando la importancia de las cuestiones que planteaba.

En su sentencia, el Tribunal señala en primer lugar que el párrafo 1 del artículo 11 "no garantiza ningún trato especial a los sindicatos o a sus miembros, por parte del Estado, tal como el derecho a ser consultados por él". No obstante, el Tribunal entiende que los términos de esta disposición muestran "que la Convención salvaguarda la libertad de proteger los intereses profesionales de los miembros del sindicato mediante actividades sindicales, que los Estados deben permitir y hacer posible que se realicen y desarrollen". A juicio del Tribunal "se deduce que los miembros de un sindicato, a fin de proteger sus intereses, tienen derecho a que se oiga al sindicato". Sin duda alguna, el párrafo 1 del artículo 11 "deja a la discreción del Estado la elección de los medios que han de utilizarse para ese fin. Si bien la consulta es uno de esos medios, aún hay otros". Lo que requiere la Convención es "que en virtud de la legislación nacional se permita que los sindicatos, en condiciones que no constituyan una violación del artículo 11, luchen por la protección de los intereses de sus miembros".

El Tribunal señala que el sindicato demandante puede adoptar diversos tipos de medidas respecto del Gobierno belga, y que la política general del Estado demandado de restringir el número de organizaciones que deben ser consultadas no es en sí misma incompatible con la libertad sindical. Así pues, la decisión unánime del Tribunal es que no ha habido violación del párrafo 1 del artículo 11.

A continuación, el Tribunal examina si las diferencias de trato entre el sindicato demandante y las organizaciones consultadas en virtud de la legislación belga son de carácter discriminatorio, según el significado del artículo 14 de la Convención.

En primer lugar, el Tribunal recuerda que la legislación impugnada tiene por objeto evitar "la anarquía sindical" y "asegurar una política de personal coherente y equilibrada, teniendo debidamente en cuenta los intereses profesionales de todos los funcionarios provinciales y municipales".

Lo que queda por ver es si las desventajas experimentadas por los miembros del sindicato demandante son excesivas o no lo son. A este respecto, el Tribunal declara que la medida incluida en el Decreto Real de 2 de agosto de 1966 "es un medio adecuado para alcanzar el objetivo legítimo que se desea" por cuanto "la consulta incluye cuestiones de carácter general que interesan a todos los funcionarios provinciales y municipales". Indudablemente, existe además "el hecho de denegar al sindicato demandante el derecho a ser consultado sobre ciertas cuestiones que interesan a la policía municipal únicamente", pero diversos factores hicieron que el Tribunal considerase que aun con respecto a esta última cuestión "no se había violado el principio de la proporcionalidad".

Así pues, por 10 votos contra 4, el Tribunal llega a la decisión de que no ha habido discriminación alguna en violación del párrafo 1 del artículo 11 ni del artículo 14 considerados juntamente.

14. En 1975 el Tribunal celebró audiencias públicas en relación con el asunto del Sindicato Sueco de Conductores de Locomotoras, el asunto Schmidt y Dahlström y el asunto Engel y otros.

El asunto del Sindicato Sueco de Conductores de Locomotoras, que concierne al Reino de Suecia, fue remitido al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos Humanos el 7 de octubre de 1974. El asunto se inició con una demanda presentada ante la Comisión por el mencionado sindicato, que tiene unos 1.200 miembros, empleados de los ferrocarriles estatales suecos. El sindicato demandante alega que se han violado los artículos 11, 13 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por cuanto la Oficina Nacional de Contratación Colectiva se había negado, a partir de octubre de 1968, a concertar con él un nuevo acuerdo sobre las condiciones de trabajo y de empleo. Según el sindicato demandante, esta negativa se debía a la política de la Oficina de concertar en lo posible acuerdos generales sólo con las principales federaciones sindicales de Suecia, haciendo extensivas las condiciones de dichos acuerdos a todos los empleados del Gobierno.

El asunto Schmidt y Dahlström, relativo a Suecia, fue remitido al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos Humanos el 9 de octubre de 1974. Este asunto se inició con una demanda presentada ante la Comisión el 9 de junio de 1972 por el Sr. Schmidt, profesor de la Universidad de Estocolmo, y por el Sr. Dahlström, oficial del Ejército sueco. Cada uno de los demandantes es miembro de un sindicato afiliado a una de las federaciones sindicales de funcionarios del Estado de Suecia. Los demandantes alegan que se han violado los artículos 11 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos porque en 1971 se les negó un aumento retroactivo de sueldo por pertenecer a sindicatos que habían participado en huelgas selectivas después de la ruptura de las negociaciones que se estaban celebrando para la firma de un nuevo contrato colectivo.

El asunto Engel y otros fue presentado al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos Humanos el 8 de octubre de 1974, y después por el Gobierno de los Países Bajos el 17 de diciembre de 1974. Este asunto se inició con las demandas presentadas contra los Países Bajos ante la Comisión en 1971 por cinco soldados de dicho país: los Sres. Engel, van der Wiel, de Wit, Dona y Schul. Todos los demandantes alegan la violación de los artículos 5, 6 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, considerando que el castigo disciplinario militar que se les infligió constituía una privación de libertad que, tanto por sí misma como por el procedimiento seguido para imponerla, era incompatible con el artículo 5. Por otra parte, estiman que el procedimiento denunciado era discriminatorio y violaba el artículo 14. Los Sres. Dona y Schul denunciaron también la violación de otros artículos de la Convención.

15. En 1975, la Comisión Europea remitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos los tres asuntos de educación sexual.

Estos tres asuntos se iniciaron con las demandas contra Dinamarca presentadas ante la Comisión en 1971 y 1972 por tres matrimonios daneses: el Sr. y la Sra. Kjeldsen, el Sr. y la Sra. Busk Madsen y el Sr. y la Sra. Pedersen. Las tres demandas separadas fueron unidas por decisión de la Comisión.

Los demandantes, que son padres de familia, se oponían a la idea de que en la escuela se diese educación sexual obligatoria a sus hijos, tal como se dispone en la Ley danesa de 25 de mayo de 1970, y habían pedido sin éxito a las autoridades competentes que eximieran a sus hijos. Consideraban que la educación sexual plantea cuestiones éticas y, por lo tanto, preferían encargarse ellos mismos de la instrucción de sus hijos en esta esfera. Afirmaban que la ley mencionada infringe el derecho de los padres a que se eduque a sus hijos de conformidad con sus propias convicciones religiosas y filosóficas, tal como se garantiza en el artículo 2 del Primer Protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Durante algunos años la educación sexual había constituido en Dinamarca una parte optativa del programa escolar. Sin embargo, en mayo de 1970, el Parlamento danés aprobó una ley por la que se hacía obligatoria la educación sexual. La nueva legislación disponía que la educación sexual no tenía que presentarse como un tema separado, sino que debería integrarse en la enseñanza de otras materias.

IV. ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA EN  
LO QUE RESPECTA A LA APLICACION DE LA CONVENCION EUROPEA  
DE DERECHOS HUMANOS

16. En 1975, el Comité de Ministros ejerció en dos ocasiones las facultades que le confiere el artículo 32 de la Convención Europea.

17. En el asunto Kamma contra los Países Bajos, el Comité de Ministros ha decidido que no hubo violación de la Convención. El 13 de enero de 1971, el Sr. Jacob Kamma, nacional de los Países Bajos, había presentado ante la Comisión Europea una demanda en la que alegaba que se habían violado diversos artículos de la Convención Europea. En una decisión de 21 de julio de 1972, la Comisión Europea declaró que era admisible la denuncia de que había habido una violación del artículo 18, junto con el artículo 5 de la Convención, por cuanto la policía había aprovechado que el demandante estaba detenido en espera de ser juzgado para realizar investigaciones durante un mes sobre un asesinato del que se le acusaba, aunque en aquella ocasión no estaba detenido en relación con el asesinato ni se había incoado la instrucción judicial de este caso.

Tras examinar el asunto y estudiar toda la información disponible, la Comisión llegó a la conclusión de que, por las razones expuestas en su informe, que ha sido publicado, no había habido violación de los artículos 18 y 5 de la Convención. El Comité de Ministros ha hecho suya la opinión de la Comisión y ha aprobado la resolución DH (75) 1 relativa a este asunto.

18. El Comité de Ministros también ha examinado, de conformidad con el artículo 32 de la Convención, el asunto Huber contra Austria. El 16 de junio de 1970, el Sr. Herbert Huber, de nacionalidad austriaca, presentó una demanda ante la Comisión Europea en la que alegaba que durante su detención habían sido violados varios artículos de la Convención de Derechos Humanos. En su decisión de 14 de julio de 1971, la Comisión Europea declaró admisible la denuncia relativa a la violación del párrafo 1 del artículo 6 de la Convención por lo prolongado del proceso contra el denunciante.

Tras examinar el asunto y estudiar toda la información disponible, la Comisión llegó a la conclusión por 8 votos contra 2, de que el período total necesario para determinar las acusaciones formuladas contra el denunciante no era razonable, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6 de la Convención, y que, por lo tanto, en este caso se había violado esa disposición.

Cuando el Comité de Ministros examinó este asunto, el Gobierno austriaco presentó un memorando en el que se declaraba que, en vista de la complejidad del proceso, de las dificultades ocasionadas por las comisiones rogatorias solicitadas a varios países y de la conducta obstructora del demandante, no se había violado el párrafo 1 del artículo 6 de la Convención. El Comité de Ministros, que había votado de conformidad con la disposición del párrafo 1 del artículo 32 de la Convención pero sin que se hubiera obtenido la mayoría de los dos tercios de los representantes con derecho a formar parte de él, ha decidido que no hay que tomar más medidas con respecto a este asunto. El Comité de Ministros también ha decidido publicar con fines informativos el informe de la Comisión Europea sobre este asunto y la resolución DH (75) 2 aprobada por el Comité.

V. OTRAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA  
EN LO QUE RESPECTA A LOS DERECHOS HUMANOS

a. Gussenbauer contra Austria

19. El Comité de Ministros ha tomado nota del informe de la Comisión Europea sobre este asunto, en el que la Comisión llegaba a la conclusión de que se había logrado una solución amistosa de conformidad con el apartado b) del artículo 28 de la Convención Europea, sobre la base del respeto de los derechos humanos tal como se definen en la Convención.

b. Vampel contra Austria

20. El Comité de Ministros ha tomado nota del informe de la Comisión Europea sobre este asunto. En junio de 1972, el Comité de Ministros había examinado el informe provisional transmitido por la Comisión Europea con respecto a este asunto en virtud del párrafo 2 del artículo 31 de la Convención Europea. La Comisión había expresado en su informe la opinión provisional de que el demandante había estado detenido en espera de ser juzgado durante un período injustificadamente prolongado, en violación del párrafo 3 del artículo 5 de la Convención, pero había decidido que el informe debía ser provisional en vista de que se habían suspendido, con el consentimiento de las partes, las negociaciones para llegar a una avenencia amistosa.

En su informe reciente, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la posición del demandante ha cambiado considerablemente como resultado del indulto que le ha concedido el Presidente Federal de Austria y que ello justifica que se dé por terminado el asunto eliminándolo de la lista una vez retirado por el demandante.

c. Asistencia jurídica gratuita ante la Comisión Europea de Derechos Humanos

21. El Comité de Ministros ha convenido en que el párrafo 4 del apéndice de la resolución (63) 18, relativa a la concesión de asistencia jurídica gratuita a las personas que hayan presentado una demanda ante la Comisión Europea, debe interpretarse en el sentido de que incluye el reembolso de los gastos efectuados por el demandante o por las personas nombradas para representarlo o asistirle por la labor realizada en relación con la demanda antes de que se tome la decisión de conceder asistencia jurídica gratuita.

d. Cuarto Coloquio Internacional sobre la Convención Europea de Derechos Humanos

22. El Cuarto Coloquio Internacional sobre la Convención Europea de Derechos Humanos se celebró en Roma del 5 al 8 de noviembre de 1975. El tema de este coloquio, organizado por el Secretario General del Consejo de Europa y el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Italiana, fue "Veinticinco años de protección europea de los derechos humanos: la Convención Europea de Derechos Humanos, 1950-1975". Los participantes, unos 300 especialistas en derechos humanos (profesores de universidad, magistrados, etc.) procedentes de los 18 Estados miembros del Consejo de Europa y de diversos países no europeos, examinaron seis temas. En la tarde del 5 de noviembre se celebró en el Palacio Barberini el 25º aniversario de la firma de la Convención, con asistencia del Presidente de la República Italiana y de destacadas personalidades de Italia y del Consejo de Europa.

## VI. LA CARTA SOCIAL EUROPEA

23. La Carta Social Europea, que es el complemento de la Convención de Derechos Humanos en la esfera social, fue firmada el 18 de octubre de 1961 y entró en vigor el 26 de febrero de 1965, después de haber sido ratificada por el Reino Unido, Noruega, Suecia, Irlanda y la República Federal de Alemania. Posteriormente ha sido ratificada por Dinamarca, Italia, Chipre, Austria y Francia.

La naturaleza de los derechos garantizados impone un sistema bastante especial de supervisión basado en la presentación por las Partes Contratantes de informes bienales sobre las cuestiones contempladas por las disposiciones de la Carta que cada una de ellas ha aceptado. Se envían ejemplares de dichos informes a algunas organizaciones nacionales de empleadores y trabajadores, cuyas observaciones son luego transmitidas al Secretario General del Consejo de Europa. El procedimiento de supervisión consiste en el examen de los informes y observaciones por un Comité de Expertos Independientes y por un Comité Gubernamental, a cuyas reuniones asisten actualmente, como observadores a título consultivo, una organización nacional de empleadores y una organización sindical internacional. Las conclusiones de los comités se comunican a la Asamblea Consultiva y al Comité de Ministros del Consejo de Europa. De conformidad con el artículo 29, el Comité de Ministros está facultado para dirigir todas las recomendaciones que estime necesarias a cada una de las Partes Contratantes.

El primer ciclo de supervisión concluyó el 12 de noviembre de 1971, con la aprobación de la resolución (71) 30 por el Comité de Ministros.

24. El segundo ciclo, que comprendía los años 1968 y 1969, concluyó el 29 de mayo de 1974, cuando el Comité de Ministros aprobó la resolución (74) 16. Por esta resolución y de conformidad con el artículo 29 de la Carta, el Comité de Ministros decidió:

1. Transmitir a los gobiernos de los Estados interesados las Conclusiones II del Comité de Expertos Independientes, el segundo informe del Comité Gubernamental, así como la Opinión correspondiente de la Asamblea Consultiva.
2. Señalar a la atención de esos gobiernos las observaciones formuladas en los documentos mencionados en el párrafo 1 supra, en especial por lo que se refiere a las medidas necesarias para que su legislación y prácticas nacionales recojan las obligaciones derivadas de la Carta.

25. El tercer ciclo de supervisión cubre los años 1970 y 1971. El Comité de Expertos Independientes completó su labor en 1973 con la aprobación de las "Conclusiones III". Estas fueron examinadas durante 1974 por el Comité Gubernamental, que aprobó su informe el 8 de noviembre. De conformidad con el artículo 28 de la Carta, las "Conclusiones III" y el informe del Comité Gubernamental se transmitieron a la Asamblea Consultiva, la cual los examinó en su período de sesiones de abril de 1975 y aprobó la Opinión Nº 71 (1975).

El Comité de Ministros tuvo ante sí todos esos documentos el 17 de octubre de 1975 y, en su calidad de cuarta y última autoridad supervisora de la aplicación de la Carta, tomó una decisión. La resolución aprobada (resolución (75) 26) dice lo siguiente:

"El Comité de Ministros..., de conformidad con el Artículo 29 de la Carta,

1. Decide transmitir a los gobiernos de...  
/los Estados interesados/ ... las Conclusiones III del Comité de Expertos Independientes, el tercer informe del Comité Gubernamental y la Opinión N° 71 de la Asamblea Consultiva;
2. Señala a la atención de los... gobiernos de estos... Estados las observaciones que se formulan en los documentos mencionados en el párrafo 1 supra y, en particular, los puntos 6, 7 y 8 de la Opinión de la Asamblea, acerca de los trámites necesarios para que la legislación y las prácticas nacionales se ajusten mejor a las obligaciones derivadas de la Carta."

Las palabras relativas a la opinión de la Asamblea se refieren a la sección de la Opinión N° 71 en que se insta al Comité de Ministros que recomiende a los Estados la estricta aplicación de la Carta Social y se propone que el Comité invite a los Estados interesados a que ajusten a las disposiciones de la Carta su legislación y sus prácticas referentes a los puntos indicados. Además, se propone que el Comité comunique a los Estados interesados las observaciones de los expertos independientes acerca del derecho de los trabajadores masculinos y femeninos a una remuneración igual por un trabajo de igual valor.

26. El cuarto ciclo de supervisión, que abarca los años 1972 y 1973, se inició en 1974. El Comité de Expertos Independientes ya ha examinado los informes presentados por las Partes Contratantes y pronto aprobará sus "Conclusiones IV". Francia presentará su primer informe en el curso del quinto ciclo. Se espera que el Comité Gubernamental comience a examinar los informes relativos al cuarto ciclo de supervisión a principios de 1976.

27. A lo largo de los cuatro ciclos de supervisión, tanto los expertos independientes como el Comité Gubernamental comprobaron que las Partes Contratantes cumplían cada vez mejor las disposiciones de la Carta. Esto resultaba especialmente visible en el número considerable de cambios introducidos en la legislación, reglamentos y prácticas de los distintos países miembros para ajustar más sus respectivas situaciones nacionales a los requisitos de la Carta. Esos ejemplos de progreso práctico ponen de manifiesto la naturaleza dinámica del sistema de supervisión de la Carta.

En el cuarto ciclo de supervisión, el Comité de Expertos Independientes observó que la mayoría de las Partes Contratantes mencionaban en sus informes casos en los que ya habían modificado su legislación u otros casos para los que se estaba preparando la revisión de ciertas leyes.

28. Entre las nuevas realizaciones observadas en el cuarto ciclo de supervisión de la aplicación de la Carta figuran las siguientes:

- En Austria, el 1º de enero de 1975 entró en vigor una nueva legislación que se refiere a un aspecto de la prohibición del trabajo forzado y deroga las disposiciones de la Ley de vagos de 1895 y el artículo 305 del Código Penal que el Comité había juzgado incompatibles con el derecho a la libre elección del empleo garantizado por el párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta.
- En Chipre, la reforma de la Ley de seguridad social, que entró en vigor el 1º de enero de 1973, mejoró notablemente el sistema de seguridad social, pudiendo afirmarse que desde entonces Chipre tiene un verdadero régimen de seguridad social y por lo tanto cumple el párrafo 1 del Artículo 12 de la Carta.
- En Dinamarca, la entrada en vigor de la Ley sobre la marina mercante, el 13 de junio de 1973, ajustó la legislación danesa al párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta.
- En la República Federal de Alemania se ha decidido que los trabajadores migrantes nacionales de todos los Estados Contratantes de la Carta social sólo deberán haber cumplido un año de residencia para que sus familias puedan reunirse con ellos, en vez de los tres años que se exigen normalmente. De este modo, la situación en la República Federal de Alemania se ajusta al párrafo 6 del Artículo 19 de la Carta, que se refiere a la reunión de las familias.
- En Irlanda, la nueva Ley sobre elecciones locales de 1972 y la "Schedule to Local Government Order (1878) amended" suprimieron las discrepancias que existían entre la legislación irlandesa y el párrafo 2 del Artículo 13 de la Carta.
- En Noruega, el Parlamento está estudiando una enmienda a la ley que permite sancionar a los marinos que abandonan sus trabajos; si se aprueba dicha enmienda, la ley quedará en conformidad con el párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta.
- En Suecia ha entrado en vigor una nueva legislación sobre los marinos que es compatible con los requisitos del párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta.
- En el Reino Unido, desde enero de 1973 ya no se deniega por razones médicas el permiso de entrada de las esposas e hijos de los residentes permanentes. Al parecer, con esta medida la situación queda en conformidad con uno de los requisitos del párrafo 6 del Artículo 19 de la Carta.

Además de nuevas ratificaciones de la Carta por Estados que ya la han firmado, es de esperar que aumente también el número de compromisos contraídos por las actuales Partes Contratantes en particular a consecuencia de las modificaciones introducidas en su legislación nacional.



Varios Estados miembros del Consejo de Europa que aún no son Partes Contratantes de la Carta Social Europea han demostrado un gran interés en ratificarla. En algunos casos -como en Luxemburgo y en Islandia- ya se ha presentado al Parlamento el proyecto de ley que autoriza al Gobierno a ratificar la Carta.

Los diferentes órganos de supervisión de la Carta han planteado la cuestión de las disposiciones para aplicar el artículo 22 de la misma, que trata de los informes relativos a las disposiciones que no han sido aceptadas todavía por las Partes Contratantes.

29. El sistema de supervisión constituye también un excelente conducto de comunicación entre los expertos gubernamentales de las Partes Contratantes, las organizaciones de empleadores y de empleados, los expertos independientes, los parlamentarios y el Comité de Ministros. Esta consulta continua, aunque es difícil representarla en cifras, sólo puede favorecer el progreso en la esfera social.

VII. ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA

30. En 1975, la Asamblea aprobó los siguientes textos relativos a los derechos humanos y materias conexas:

- Recomendación 757 (1975), sobre las conclusiones de la reunión que el Comité de Asuntos Jurídicos de la Asamblea celebró con los Ombudsmen y los Comisionados Parlamentarios de los Estados miembros del Consejo de Europa, que dice así:

"La Asamblea,

1. Acogiendo con beneplácito la reunión que su Comité de Asuntos Jurídicos celebró con los Ombudsmen y los Comisionados Parlamentarios de los Estados miembros del Consejo de Europa (París, 18 y 19 de abril de 1974);
2. Considerando que los Ombudsmen, los Comisionados Parlamentarios, etc., tienen una doble misión de suma importancia, que es la protección de las personas contra la mala administración pública y la promoción del buen gobierno en general;
3. Consciente de que las autoridades controlan actualmente cada vez más aspectos de la vida humana;
4. Considerando que, mientras los Estados han tomado a su cargo la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, estos mismos derechos y libertades pueden peligrar por la intrusión de las autoridades públicas en la vida privada del individuo;
5. Considerando además que las formas habituales de fiscalización judicial no son siempre adecuadas para hacer frente con suficiente rapidez y eficacia a todas las facetas y complicaciones de la administración actual;
6. Convencida de que se necesita una garantía adicional que opere en forma más sencilla rápida, barata y flexible que los recursos judiciales existentes;
7. Estimando que un Ombudsman o un Comisionado Parlamentario puede proporcionar esa garantía;
8. Convencida también de que el Ombudsman, por medio de la información y asistencia que proporciona al Parlamento, contribuye a fortalecer el control parlamentario sobre el poder ejecutivo.
9. Observando con beneplácito que en los últimos años ha aumentado notablemente en Europa la adopción en los planos nacional y local de la institución del Ombudsman o Comisionado Parlamentario;

10. Recomienda que el Comité de Ministros invite a los gobiernos de los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de designar personas que desempeñen en el plano nacional, regional o local funciones semejantes a las que desempeñan los Ombudsmen y los Comisionados Parlamentarios existentes."

- Resolución 596 (1975) sobre la aplicación del artículo 57 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que dice así:

"La Asamblea,

1. Habiendo examinado las respuestas de los gobiernos a la consulta efectuada en 1970 por el entonces Secretario General sobre la aplicación del párrafo 5 del artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 57 de la Convención;
2. Considerando que las respuestas de los gobiernos a esta consulta son, en general, interesantes y satisfactorias, y pueden contribuir a la aplicación efectiva de la Convención en los Estados miembros del Consejo de Europa;
3. Toma nota con satisfacción de la iniciativa que adoptó el Secretario General en 1970;
4. Acoge con beneplácito la reciente iniciativa del actual Secretario General al consultar sobre la aplicación de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Convención;
5. Expresa la esperanza de que el Secretario General siga utilizando sus poderes de conformidad con el artículo 57 de la Convención."

- Resolución 597 (1975) sobre las cláusulas discrecionales de la Convención Europea de Derechos Humanos, que dice así:

"La Asamblea,

1. Acogiendo con beneplácito el hecho de que la Convención de salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales esté ahora en vigor en los 18 Estados miembros del Consejo de Europa;
2. Considerando que el derecho de demanda individual y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos figuran entre las nuevas disposiciones más importantes de la Convención, ya que permiten la aplicación efectiva en Europa de los derechos humanos proclamados en la Convención;
3. Considerando que el reconocimiento del derecho de demanda individual y el reconocimiento de la jurisdicción obligatoria del Tribunal de Derechos Humanos (artículos 25 y 46 de la Convención) son discrecionales y están sujetos a las declaraciones hechas por los gobiernos de los Estados Contratantes;

4. Deplorando que cinco Estados miembros del Consejo de Europa no hayan reconocido el derecho de demanda individual, y que cuatro Estados miembros no hayan reconocido la jurisdicción obligatoria del Tribunal;

5. Deplorando que, en consecuencia, estos Estados miembros no permitan a los individuos, a las organizaciones no gubernamentales ni a los grupos de particulares bajo su jurisdicción que formulen demandas ante la Comisión Europea de Derechos Humanos;

6. Insta a los Estados miembros que aún no hayan reconocido el derecho de demanda individual y la jurisdicción obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a que lo hagan en cuanto les sea posible."

- Recomendación 768 (1975) sobre la tortura en el mundo, que dice así:

"La Asamblea,

1. Consternada por el hecho de que la tortura se practique en más de 60 países;

2. Considerando que no se trata de excesos cometidos por particulares o por grupos que actúan deliberadamente fuera de la ley, sino que son los funcionarios públicos quienes practican la tortura, no sólo con la aprobación del gobierno sino en cumplimiento de sus órdenes;

3. Considerando que algunos gobiernos adiestran sistemáticamente a sus funcionarios en las técnicas de torturas;

4. Convencida de que la Asamblea del Consejo de Europa no puede permanecer indiferente mientras en ciertos países se producen graves violaciones de los derechos humanos;

5. Considerando que la tortura es una de las formas más horribles y perversas de brutalidad física o moral que un ser humano puede infligir a otro;

6. Insistiendo con la mayor energía en que la tortura constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos;

7. Acogiendo con beneplácito el hecho de que el Consejo de Europa ha aprobado instrumentos destinados a comprobar que en sus Estados miembros se respetan los derechos humanos y de que el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos estipula que nadie puede ser sometido a la tortura;

8. Convencida de que la extradición o la expulsión a los países en que los organismos gubernamentales practican o toleran la tortura es contraria al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos;

9. Recomienda que el Comité de Ministros:

- a. Reconozca oficialmente el principio establecido en las conclusiones de la reunión de 1969 sobre la aplicación de la Convención Europea sobre extradición en el sentido de rechazar la extradición si ésta puede ocasionar un trato inhumano;
- b. Examine la posibilidad de que los Estados miembros revisen los convenios sobre extradición y asistencia mutua en asuntos judiciales que hayan concertado con países en los que los organismos gubernamentales practiquen o toleren la tortura, y estudie además las prácticas de esos países en materia de expulsión."

#### VIII. PUBLICACIONES

31. En 1975 se publicó el 16º volumen del Yearbook of the European Convention on Human Rights, que abarca el año 1973. El anuario contiene información general sobre la Convención, la Comisión y el Tribunal, ciertas decisiones de la Comisión sobre admisibilidad de reclamaciones, decisiones del Comité de Ministros y fallos del Tribunal, así como información sobre la aplicación de la Convención en el derecho nacional de los tribunales de ciertos Estados miembros.

32. En 1975, el Directorio de Derechos Humanos publicó un documento sobre los aspectos nacionales de la Convención Europea de Derechos Humanos y los trabajos de la Mesa Redonda sobre los consejos de prensa celebrada en Estocolmo en septiembre de 1974.

En 1975 se publicó el primer volumen de los Travaux Préparatoires de la Convención Europea de Derechos Humanos.

-----